«Res publica, res aliena»: de la «domus» al desarraigo

Hay cosas que nadie necesita que le expliquen. Cuando la nevera se vacía, el primer latido de una madre siempre lleva el nombre de sus hijos; cuando arrecia el temporal, la principal preocupación de un padre es la salvaguarda de los suyos, asumiendo con entereza ese instinto ancestral del *pater familias.* No es una forma menor de egoísmo, sino el lenguaje más elemental de la responsabilidad: cuidar empieza por reconocer a quién debemos cuidado. Ayudar a los demás es una virtud, pero hacerlo a costa de desatender a quienes dependen de nosotros en un contexto de escasez supone invertir el orden más natural de nuestras obligaciones. Ampararse en una supuesta superioridad moral cristiana para justificar su indiferencia hacia lo propio resulta difícilmente conciliable con palabras como las de San Pablo: «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo» (1 Timoteo 5:8).

Curiosamente, aquello que parece tan evidente se disemina en cuanto atravesamos el portal de nuestra casa y hablamos de España: la «*domus*» común de todos los españoles. El erario y los recursos públicos se presentan entonces como una suma sin memoria, como si detrás de cada euro generado en España no hubiera años de trabajo, persianas levantadas al amanecer, campos labrados de sol a sol y manos encallecidas por el oficio, como si cada moneda no llevara grabada la impronta de generaciones de españoles, de cuyo legado somos hoy depositarios y de cuya transmisión a quienes nos sucedan somos responsables. Así, lo exógeno se antepone a lo endógeno, lo ajeno a lo propio y el desarraigo a echar raíces, hasta el extremo de convertir al español en un «peregrinus» de su propia patria.

¿Qué pensará aquel minero asturiano que, después de pasar jornadas interminables bajo tierra, respirando polvo y castigando su cuerpo para llevar un jornal –muchas veces insuficiente– a casa, descubre que año tras año se despilfarran miles de millones a programas de cooperación al desarrollo en países que ni siquiera sabría ubicar en el mapa? Quizá se pregunte si merece la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas horas arrebatadas a su familia y a los suyos, tantos abrazos que no pudo dar, tantas cenas en las que la sopa se enfrió esperando su regreso y tantos momentos con sus hijos que jamás podrá recuperar, para que el fruto de una vida entregada al trabajo termine financiando vidas ajenas, mientras aquellos por quienes se sacrificó siguen acumulando renuncias. Y es que no hablamos de cifras anecdóticas: mientras que en 2018 España destinaba 2.448,96 millones de euros a Ayuda Oficial al Desarrollo, en 2025 la cuantía alcanzó los 4.550 millones de euros. Un incremento de 2.101 millones de euros, equivalente a una subida de casi el 86 % en apenas siete años. Y basta con descender de las grandes cifras a sus destinatarios para poner nombre a esa distancia: desde la Asociación Amazónicos por la Amazonía hasta la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, pasando por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Pachamama Iberoamericana.

Pero sería ingenuo por nuestra parte pensar que esta historia termina donde acaba el presupuesto público. Hay otro fenómeno, menos visible y que suele pasar más desapercibido para buena parte de los españoles, pero que cada año recorre miles de kilómetros en dirección contraria a la de quienes llegaron a España: las remesas. Imaginaos a Abdelilah, procedente de Rabat, que al terminar su jornada de trabajo envía parte de su salario a su familia en Marruecos, país al que en 2025 llegaron 1.589 millones de euros procedentes de España. O a Luisa Fernanda, originaria de Medellín, que hace lo propio con sus familiares en Colombia, destino de otros 2.022 millones. Estos casos no son marginales: solo en 2025, desde España se enviaron 7.369 millones a América, 2.770 millones de euros a África y 1.376 millones a Asia, una suma que junto a cantidades enviadas a otras zonas del planeta alcanzó los 12.405 millones de euros en tan solo un año. Basta con mirar atrás para comprender la magnitud del suceso ante el que nos encontramos: en el año 2000 únicamente salieron 1.445,84 millones de euros, que equivalen a lo que hoy se envía en apenas seis semanas; un incremento nominal del 758 % en tan solo una generación, 11.000 millones más anuales en 25 años.

Pero el recorrido de los recursos no acaba ahí. Primero es el propio Estado quien dota de miles de millones de euros a países extranjeros; después, son quienes llegan a España los que remiten parte del dinero ganado aquí a sus lugares de origen. Y, por si fuera poco, existe una tercera dicotomía: el acceso de quienes vienen de fuera a unas prestaciones sociales financiadas por los nacionales, bajo la lógica que parece reducir a España a una mera vaca a la que ordeñar como si sus recursos no fueran finitos. Basta con observar que este año, en provincias como Gerona, Teruel o Lérida, alrededor de cuatro de cada diez titulares del Ingreso Mínimo Vital son extranjeros –el 41 %, el 40 % y el 38,5 % respectivamente–. Pero las cifras de las rentas mínimas autonómicas del año pasado aún adquieren mayores dimensiones: en Baleares, ocho de cada diez titulares son extranjeros (81,92 %); en Navarra, más de la mitad (54,53 %); y en La Rioja, practicamente uno de cada dos (49,85 %). Todo ello configura una realidad cada vez más habitual en nuestros tiempos, que evoca las reflexiones de Maurice Barrès en *Contre les étrangers. Étude pour la protection des ouvriers français,* publicada el año 1893: «[...] hasta qué punto somos impotentes para socorrer las miserias de nuestros propios nacionales».

A las dificultades que los españoles arrastran en su día a día –desde la dificultad para acceder a una vivienda digna y la precariedad salarial hasta una burocracia asfixiante, la saturación sanitaria y el encarecimiento continuo del coste de la vida– se añade una realidad todavía más difícil de comprender: la de una casta política endófoba que parece haber convertido el desprecio hacia lo propio en una virtud política, hasta el extremo de presentar los lazos que vertebran y dan sentido a la comunidad nacional como una anomalía moral. Una subversión de las lealtades del gobernante hacia su pueblo que recuerda lo que Guillaume Faye definió como «etnomasoquismo»: la autonegación de una comunidad que, avergonzada de su propia identidad, termina considerando moralmente superior la defensa de los intereses ajenos a la protección de lo propio.

Pero España no está condenada a resignarse a su propia decadencia. Recuperar el rumbo exige, ante todo, tres decisiones de fondo: en primer lugar, ejecutar un proceso de remigración que facilite el retorno a sus países de los extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios; en segundo lugar, implementación de la prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida y ayudas sociales, para que el esfuerzo de los españoles revierta primordialmente en su bienestar, así como establecer un gravamen sobre las remesas enviadas al extranjero, de modo que la riqueza generada en España contribuya al sostenimiento de nuestros servicios públicos; y, finalmente, una desregulación profunda que permita desenredar España de la maraña burocrática que asfixia a los españoles que trabajan, emprenden y forman una familia. Sin embargo, ninguna de estas transformaciones será posible sin afrontar una última cuestión, acaso la más importante: desalojar del poder a quienes gobiernan al servicio de agendas ajenas, recuperando así la «España feliz» en la que nuestros padres y abuelos crecieron y formaron un proyecto común.